



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Oficina Asesora Jurídica**

**OJ -01236- 22**

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2022

**De: JAVIER BOLAÑOS ZAMBRANO**  
**Jefe Oficina Asesora Jurídica**

**Para: JORGE ENRIQUE VERGARA VERGARA**  
**Jefe Recursos Humanos**

**Asunto: Concepto Jurídico**

**Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ RAD: 11001 33 35**  
**022 2019 00444 01 / DTE: ELIZABETH PALACIOS MONTOYA**

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de concepto jurídico radicada el pasado 13 de octubre de 2022 mediante oficio DRH-2330 - 2022 IE-21256 - 2022, en el cual se requirió:

*“...concepto jurídico respecto al cumplimiento del fallo 2019-444 de la señora Elizabeth Palacios Montoya, esto en consideración al fallo del Tribunal Administrativo De Cundinamarca, Sección Segunda- Subsección “C”... La anterior solicitud, se realiza de conformidad a que en la referida sentencia se ordena Condenar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a pagar a la señora Elizabeth Palacios Montoya identificada con cédula de ciudadanía No. 51.666.389, las mesadas dejadas de pagar y que resulten a su favor por concepto de la sustitución de la pensión en el porcentaje que le corresponde, con efectividad a partir del 29 de julio de 2018, según lo dispuesto en esta sentencia, pasando de alto que la Universidad Distrital mediante Resolución No 442 del 20 de diciembre de 2018 y resolución No. 107 del 12 de marzo de 2019, reconoció la prestación de sobreviviente a la señora Nydia María Gómez Escobar, pagando un retroactivo de \$ 101,638.729 el 06 de junio de 2019 mediante la orden de pago No. 5869 de 2019.*

*Es así como, solicitamos se indique el proceder en este cumplimiento y si es el caso se inicien los trámites respectivos para el cobro judicial a la señora Nidya María Gómez Escobar, del valor mayor pagado por concepto de sustitución pensional, ya que, al cumplir esta orden, se incurrirá en un pago doble por este concepto, lo que generara un detrimento para la entidad, teniendo en cuenta que no existe orden de reintegrar el dinero ya pagado”...*

A continuación, se procede a emitir el concepto jurídico solicitado:

**En cuanto al cumplimiento obligatorio de la sentencia judicial- termino de cumplimiento**

Página 1 de 5

Línea de atención gratuita  
**01 800 091 44 10**



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Oficina Asesora Jurídica**

El artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, indica que:

*“...Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.*

*Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.*

*Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código.*

*Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.*

*En asuntos de carácter laboral, cuando se condene al reintegro, si dentro del término de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, este no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo.*

*El incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas con el reconocimiento y pago de créditos judicialmente reconocidos acarreará las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar.*

*Ejecutoriada la sentencia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los oficios correspondientes...”*

Por otro lado, el artículo 302 contenido en la ley 1564 de 2012, refiere:

*“...Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.*

*No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.*

*Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos...”*

Con lo anterior, se tiene que toda sentencia judicial es de obligatorio cumplimiento y adicionalmente se establecen los términos máximos que tiene la entidad pública para dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo judicial.



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Oficina Asesora Jurídica**

Es así como, en el caso objeto de estudio se tiene que en el marco del proceso con radicado No. 11001333502220190044401, el JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO DE LA ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. -SECCIÓN SEGUNDA, profirió sentencia en primera instancia de fecha 21 de enero de 2022, revocada en segunda instancia a través de sentencia de fecha de 10 de agosto de 2022 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “C”; ambas sentencias cobraron ejecutoria solo hasta el 19 de agosto de 2022 (según constancia expedida por el TAC). Por lo tanto, la fecha máxima para el cumplimiento de la decisión judicial termina el próximo 19 de junio de 2022.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que el pasado 21 de octubre de 2022 la Universidad profirió resolución Nro. 582 del 21 de octubre de 2022, por medio de la cual se dio cumplimiento parcial a la sentencia judicial, específicamente a los puntos 2 y 3, a la fecha se encuentra pendiente el cumplimiento de las siguientes ordenes:

*“...4°. Condenar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a pagar a la señora Elizabeth Palacios Montoya identificada con cédula de ciudadanía No. 51.666.389 las mesadas dejadas de pagar y que resulten a su favor por concepto de la sustitución de la pensión en el porcentaje que le corresponde, con efectividad a partir del 29 de julio de 2018, según lo dispuesto en esta sentencia.*

*5°. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pagará a la demandante el valor de la indexación de las sumas que resulten a su favor, teniendo en cuenta la fórmula sobre la cual orienta el Honorable Consejo de Estado explicada en la parte considerativa de esta providencia...”*

Es decir que, acorde a lo estipulado en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, desde la fecha en la cual la sentencia cobró ejecutoria y solo hasta tanto se desembolsen los dineros ordenados a la beneficiaria, se deberán pagar intereses moratorios; por lo cual resulta indispensable que se de cumplimiento de manera inmediata a la orden judicial en mención, dado que el no pago afecta gravemente el rubro presupuestal que se debe asignar para el referido pago.

**En cuanto a la procedencia del recobro a la Sra. Nydia María Gómez Escobar, identificada con cedula de ciudadanía Nro. 42.715.947 por los mayores valores desembolsados**

En este punto, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 164 de la ley 1437 de 2011, que reza:

*“...ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:*

*1. En cualquier tiempo, cuando:*

*a) Se pretenda la nulidad en los términos del artículo 137 de este Código;*

*b) El objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables;*



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Oficina Asesora Jurídica**

*c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe...”*

Sin embargo, vía jurisprudencia se ha establecido un tratamiento diferente para los casos de mayores valores pagados en prestaciones periódicas y mayores valores desembolsados en pagos unitarios.

Es así, como en sentencia de fecha 1 de septiembre de 2014, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Rad. 25000-23-25-000-2011-00609-02(3130-13), el Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, indicó:

*“...Precisa la Sala que ésta clara línea jurisprudencial se ha mantenido para los casos en que se han recibido prestaciones periódicas tales como la pensión de jubilación producto de un error de la administración. No obstante, en tratándose de prestaciones unitarias se ha dado un tratamiento diverso, como el señalado en sentencia de la Subsección “B”, de 8 de mayo de 2008, dentro del expediente radicado con el No. 0949 de 2006, en donde se consideró que la presunción para ese caso no estaba contemplada en la norma, la cual solo podía ser interpretada en su tenor literal, por lo que no se podía extender la tesis a todos aquellos pagos unitarios efectuados por la administración en virtud de actos administrativos y en consecuencia, para estos era viable la devolución del dinero. La posición así fijada encuentra su razón de ser en el principio de la buena fe, que implica la convicción del ciudadano, en que el acto emanado de la administración está sujeto a legalidad y por ende no tiene que prever que sea susceptible de demanda judicial o revocatoria, pues existe una legítima confianza en la actuación pública dada precisamente por la presunción de legalidad de la que gozan los actos administrativos. De acuerdo a lo anterior, tenemos que el principio de la buena fe señalado en el inciso segundo del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales, no puede la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe...”*

Para el caso objeto de estudio, según lo manifestado por esa dependencia, la Universidad Distrital mediante Resolución No 442 del 20 de diciembre de 2018 y resolución No. 107 del 12 de marzo de 2019, reconoció la pensión de sobreviviente a la señora Nydia Maria Gómez Escobar, pagando un retroactivo de \$ 101,638.729 el 06 de junio de 2019 mediante la orden de pago No. 5869 de 2019.

Es decir, que procede únicamente el recobro del 50% del valor desembolsado mediante la orden de pago No. 5869 de 2019 a la Sra. Gómez Escobar, más no el recobro de los mayores valores pagados mensualmente por concepto de pensión de sobreviviente desde el mes de julio de 2019, toda vez que los desembolsos mensuales efectuados se entienden como pagos periódicos, los



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Oficina Asesora Jurídica**

cuales, según lo expuesto no puede ser cobrados por la administración bajo el entendido que fueron recibidos de buena fe por la beneficiaria.

En los anteriores termino se rinde el concepto jurídico solicitado.

Para terminar, agradezco se remita a esta división el expediente administrativo de la señora Nydia María Gómez Escobar, con el fin de iniciar las gestiones del cargo.

Atentamente,

**JAVIER BOLAÑOS ZAMBRANO**  
**Jefe Oficina Asesora Jurídica**

<b>FUNCIONARIO ASESOR</b>	<b>O</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>FECHA</b>	<b>FIRMA</b>
Proyectado		Jeimmy Galindo M - Abogada RDC	24/10/2022	